



Sr. Amilivia González, Presidente y
Ponente

Sr. Rey Martínez, Consejero
Sr. Velasco Rodríguez, Consejero

Sra. García Fonseca, Secretaria

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 7 de octubre de 2014, ha examinado el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de D. xxxx1 y D. xxxx2*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 11 de septiembre de 2014 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de D. xxxx1 y D. xxxx2, representados por Dña. yyyy, debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite el 12 de septiembre de 2014, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 453/2014, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Amilivia González.

Primero.- El 22 de mayo de 2014 D. xxxx1 y D. xxxx2, representados por Dña. yyyy, presentan en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxx1 una reclamación de responsabilidad patrimonial, debido a las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo, matrícula vvvv,



propiedad de la Guardia Civil, en un accidente acaecido el 29 de julio de 2013, a las 04:20 horas, en el punto kilométrico 6,400 de la carretera autonómica cc100 en dirección a xxx2, al irrumpir de forma súbita en la calzada un jabalí y colisionar con él.

Consideran que existe responsabilidad de la Administración Autonómica como titular de la vía en la que se produjo el siniestro.

Solicitan una indemnización de 7.689,38 euros para D. xxxx1 por el período de incapacidad temporal que se prolongó hasta el alta, obtenida el 27 de noviembre de 2013, y de 3.960,32 euros para D. xxxx2 por el mismo concepto, quien obtuvo el alta el 4 de octubre del mismo año.

Acompañan a la reclamación copias de escrito del Consorcio de Compensación de Seguros, en el que señala que no le corresponde hacerse cargo de la indemnización; del atestado instruido y del formulario de obtención de datos de la Guardia Civil; de los partes de baja y alta por incapacidad temporal de ambos interesados y del Auto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de xxx1 de 2 de agosto de 2013, en el que se decreta el archivo de las diligencias previas de procedimiento abreviado incoadas con motivo del accidente.

A requerimiento de la Administración aportan copia de la documentación acreditativa de la representación de ambos reclamantes.

Segundo.- Obra en el expediente informe del Jefe de Sección de Conservación y Explotación del Servicio Territorial de Fomento de 28 de mayo de 2014, acompañado de croquis y partes de colocación, del que resulta que la carretera en cuestión, cc100, de cc111 a xxx3 (cc152), es de titularidad autonómica desde el punto kilométrico 0,440 al punto kilométrico 46,100 y se encontraba en buen estado de conservación y bien señalizada. Relata, además, que la siniestralidad por animales en libertad fue en 2011, desde el 29 de julio, de 0 accidentes, 1 en 2012, y 3 (1, el que motiva la reclamación), hasta el 29 de julio de 2013.

Por otra parte, el 26 de mayo de 2014 la instructora del procedimiento recabó informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente sobre la eventual existencia de un coto de caza en las proximidades del lugar del accidente y de las



actividades cinegéticas autorizadas en la fecha de su producción. Reiterada la petición el 2 de julio, el 5 de agosto no consta la emisión de informe al respecto.

Tercero.- El 16 de julio se concede trámite de audiencia a los reclamantes, quienes el 21 de julio siguiente presentan alegaciones en las que reiteran la pretensión.

Cuarto.- El 7 de agosto se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación.

Quinto.- El 8 de agosto de 2014 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial informa favorablemente la propuesta de resolución indicada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.i), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el dictamen según lo establecido en el apartado tercero, 1.g) del Acuerdo de 6 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo, por el que se determina la composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

Llama la atención, no obstante, la falta de contestación por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente a la petición de informe -reiterada hasta en tres ocasiones por el instructor del procedimiento- a fin de dilucidar



eventuales responsabilidades derivadas de la actividad cinegética. El principio de colaboración administrativa adquiere la cualidad de deber cuando se trata de órganos, ya no sólo de la misma Administración, sino de la misma Consejería, como ocurre en este caso tras la unificación de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, materializada en el Decreto 2/2011, de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías. Ello sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, de acuerdo con el artículo 83.3 de la Ley 30/1992.

3ª.- Concurren en los reclamantes los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se ha acreditado la representación en los términos que en ella se establecen.

La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992 y en el artículo 16 del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus Órganos Directivos Centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

La reclamación se ha interpuesto en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina del Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad



patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- En cuanto al fondo de la cuestión planteada, el análisis de las circunstancias que concurren en el caso sometido a dictamen permite apreciar la inexistencia de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Ha quedado acreditado que los daños que fundamentan la reclamación se produjeron en un accidente acaecido al colisionar el vehículo con un jabalí que irrumpió en la calzada, a la altura del punto kilométrico 6,400 de la carretera autonómica cc100.

El jabalí tiene la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como establece el artículo 13.1 del Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Además, se considera pieza de caza, según los artículos 9 de la Ley 4/1996, de



12 de julio, de Caza de Castilla y León y 14 del citado Decreto 65/2011 y las órdenes anuales de caza.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, "La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación. La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por las especies cinegéticas se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente".

Con arreglo a ello, la normativa de aplicación es la disposición adicional novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Dicha disposición adicional, en la redacción vigente al tiempo del siniestro, establecía lo siguiente:

"En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.

»Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

»También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización".

Ha de destacarse que la responsabilidad de la Administración por los daños ocasionados en estos supuestos no tiene carácter objetivo. En tal sentido, este Consejo Consultivo mantiene que la disposición adicional novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial introdujo un sistema de responsabilidad por culpa en los daños producidos en accidentes de circulación por atropello de especies cinegéticas. Así lo considera también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su Sentencia de 22 de mayo de 2009 cuando señala que, en materia de responsabilidad en



accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, “no nos encontramos ante un sistema de responsabilidad objetiva (por la mera producción del daño causado por la sola presencia de una especie cinegética en la calzada), ni de responsabilidad cuasi-objetiva (salvo culpa exclusiva del conductor o fuerza mayor), ni siquiera objetiva atenuada (con presunción de culpa del titular del aprovechamiento cinegético, propietario del terreno, o titular de la vía pública), pues tanto la existencia del coto como la conducción de un vehículo de motor son susceptibles de generar una situación de riesgo, sino que nos encontramos ante un genuino sistema de responsabilidad por culpa que, de entrada, supone aceptar la posibilidad de que no haya declaración de responsabilidad por no acreditarse culpa o falta de diligencia de alguno de los potenciales intervinientes, y de admitir, por tanto, que existan daños personales y patrimoniales ocasionados en accidentes de tráfico por atropello de especies cinegéticas que no sean indemnizables por no ser exigibles a terceros, lo que en sede contencioso-administrativa se traduce en el deber jurídico de soportar el daño por parte del perjudicado”.

En el caso planteado, no consta en el informe de la Guardia Civil ni ha sido probado por la Administración que se haya producido infracción de las normas de circulación por parte del conductor.

No consta, por otra parte, que la Administración Autonómica sea titular del aprovechamiento cinegético o de los terrenos limítrofes al lugar del accidente desde los que irrumpió el corzo, a los efectos de derivar la responsabilidad del segundo título de imputación.

Finalmente, debe analizarse el estado de conservación y señalización de la carretera para determinar si existe o no responsabilidad de la Administración de la Comunidad, conforme a la disposición adicional novena citada, título en el que los interesados fundan la pretensión.

La Administración está obligada a la conservación y mantenimiento de las carreteras de las que sea titular y a realizar las actuaciones precisas para la defensa de la vía y su mejor uso, entre las que se incluyen las referentes a la señalización (artículo 15 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; artículo 48, apartados 1 y 2, del Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre y artículo 19 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León).



Asimismo, el artículo 57 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, antes citada, prevé que "Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa".

En el presente caso, el informe del Servicio Territorial de Fomento confirma que la carretera se encontraba en buen estado de conservación. Asimismo, en el informe de la Guardia Civil no consta como factor concurrente en el accidente el estado o condición de la vía.

También ha quedado acreditado que la señalización de la carretera era adecuada. Según informa el Servicio Territorial de Fomento "Se colocan las señales de peligro P-24, animales en libertad, con señal complementaria delimitando el tramo peligroso o sujeto a prescripción, para informar al usuario de la carretera del posible peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad, como mejor medida efectiva para que el usuario pueda evitar el accidente por colisión o atropello de los mismos.

»Estas señales están colocadas en p.k. 5+100, margen derecho.
Fecha de colocación: agosto de 2012.

»Que los carteles de animales en libertad están situados en los siguientes puntos kilométricos: En el margen derecho 4+330".

Según el croquis adjunto a dicho informe, tanto el cartel de animales en libertad, como la referida señal P-24, con advertencia de peligro en 5 km, fue sobrepasada por el vehículo, el cual colisionó en el p.k.6+400.

En el mismo sentido, el informe de la Guardia Civil constata la existencia de señalización de peligro, además de referir que la visibilidad no estaba restringida y que no fue factor concurrente en el accidente el estado o condición de la señalización.



Respecto de una eventual responsabilidad de la Administración Autonómica por incumplimiento de su obligación de efectuar controles de especies cinegéticas en las zonas de seguridad, ha de ponerse de manifiesto que estos controles no son obligatorios (el artículo 26.3 de la Ley 4/1996, emplea el término "podrá"), sino que serán necesarios cuando la situación poblacional del animal (en este caso, jabalí) en esa zona sea lo suficientemente elevada.

A este respecto, los datos de siniestralidad en los dos años previos al accidente en el tramo comprendido entre las señales P-24 del lugar en el que acaeció, que refleja el informe del Servicio Territorial de Fomento y que han sido relacionados en el antecedente segundo de este dictamen, no parecen imponer la adopción de tal medida, pues se mueven dentro de unos límites razonables. Tampoco consta que los propietarios de los terrenos u otras personas afectadas hayan solicitado dichas actuaciones para disminuir las poblaciones de animales y evitar accidentes.

Por tanto, no puede considerarse probada la existencia de la relación de causalidad entre los daños producidos y el funcionamiento del servicio público, razón por la que la reclamación debe desestimarse.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de D. xxxx1 y D. xxxx2, representados por Dña. yyyy, debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.